PRINCIPADO DE
ANDORRA*

* La información fue remitida por el Tribunal el 1° de septiembre de 2008.

A. ESTRUCTURA

I. ORGANIGRAMA

El Tribunal Constitucional andorrano es muy pequeño, se compone de 4 magistrados y de una Secretaría General con 3 personas: la secretaria general, la oficial-letrada y la jefe de servicios administrativos.

El organigrama es muy sencillo: los temas jurisdiccionales los resuelve el Pleno del Tribunal, de la representación se encarga el presidente y de los temas administrativos la secretaria general con la supervisión del presidente.

Tras varios años de negociación con los Copríncipes y tras llegar a un consenso, el Constituyente andorrano elaboró una Constitución que fue sometida al pueblo, en referéndum, el 14 de marzo de 1993, la cual fue aprobada.

El 28 abril del mismo año, el Consejo General (Parlamento) adoptó, ratificó, sancionó y promulgó esa Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico, organizadora del funcionamiento de su Estado democrático y obligatoria para los poderes públicos y para los ciudadanos. Para garantizar esta supremacía y aplicabilidad, el título VIII de dicha Constitución atribuye al Tribunal Constitucional las funciones para que sea el garante de los mandatos que contiene. A este órgano se le confiere la potestad constitucional como intérprete supremo de la Constitución. Es un órgano autónomo, independiente y garantiza la jerarquía normativa superior sobre el resto del ordenamiento jurídico a través de resoluciones y sentencias dictadas en los procedimientos y procesos regulados por su Ley Cualificada. La jurisdicción del Tribunal Constitucional se extiende a todo el territorio del Estado

andorrano, es superior en su orden y en el ejercicio de sus competencias determinadas por la Constitución (CA) y la Ley Cualificada del Tribunal Constitucional (LCTC) a las cuales está únicamente sometido, sus decisiones vinculan a los poderes públicos y a los particulares y sus sentencias tienen el valor de cosa juzgada. La doctrina interpretativa de la Constitución elaborada por el Tribunal y que sirve de fundamento a sus sentencias vincula también a los diferentes órganos de la jurisdicción ordinaria. Sin perjuicio de lo que dispongan las convenciones y tratados internacionales válidamente ratificados por Andorra, las resoluciones y sentencias del Tribunal Constitucional no son recurribles ante otro órgano jurisdiccional. La jurisdicción del Tribunal Constitucional es preferente. Ninguna causa de que conozca puede substanciarse simultáneamente ante otro órgano jurisdiccional: en el supuesto de que se hubiese iniciado un litigio ante otro órgano jurisdiccional ordinario y se plantease la misma causa ante el Tribunal Constitucional, si éste la admite a trámite, aquel deja de conocerla.

II. BREVE DESCRIPCIÓN

El Tribunal Constitucional ejerce sus competencias jurisdiccionales y sus funciones internas de gobierno y administración a través del presidente, el vicepresidente, los magistrados ponentes y el Pleno del Tribunal (artículo 21 LCTC).

1. Temas jurisdiccionales

El Pleno del Tribunal, como órgano colegiado es el órgano superior del Tribunal Constitucional y actúa en Pleno constituido en Sala única. Está constituido por los cuatro magistrados constitucionales, pudiendo quedar constituido con tres magistrados cuando ejerce la función disciplinaria o por ausencia de uno de ellos. Para adoptar válidamente acuerdos se requiere, como mínimo, la presencia de tres magistrados constitucionales y, si se tratase de asuntos jurisdiccionales, uno de ellos debe ser el magistrado ponente. Los acuerdos se adoptan por mayoría de votos y, si el asunto debatido es de naturaleza jurisdiccional, en caso de empate decide el magistrado ponente con voto de calidad. En los asuntos no jurisdiccionales, el empate de votos impide la adopción del acuerdo.

El magistrado ponente decide y dirige cualquier procedimiento o proceso, cuya tramitación le haya correspondido en todos los asuntos jurisdiccionales que no sean competencia del Pleno. Redacta una propuesta de resolución o sentencia que ha de ser aprobada por el Pleno o, si procede, redacta la resolución o sentencia que refleje el pronunciamiento mayoritario de éste.

2. Representación

El presidente es el órgano individual de dirección, gobierno y representación del Tribunal Constitucional. El vicepresidente ejerce las funciones del presidente en casos de imposibilidad física de éste o por delegación expresa.

La Presidencia del Tribunal Constitucional es ejercida por cada uno de sus miembros según un turno rotatorio durante dos años. Corresponde el cargo de vicepresidente al magistrado constitucional que debe ocupar la presidencia en el mandato siguiente.

3. Administración

Los trámites materiales de gestión y ejecución de las competencias propias del Tribunal, los realizan los miembros de la oficina administrativa permanente que se encuentra al servicio y bajo la dependencia del presidente. La secretaria general es el nexo entre los magistrados y el personal del Tribunal.

La secretaria general es la jefa del personal adscrito al Tribunal Constitucional, sin perjuicio de la superior dirección del presidente del Tribunal. Le corresponde: dirigir los servicios administrativos del Tribunal Constitucional, tomar las medidas necesarias para la preparación y la organización de los trabajos del Tribunal, dando cuenta periódicamente al presidente de los trabajos realizados, dar fe pública de las actuaciones del Tribunal y realizar la tramitación de las notificaciones y comunicaciones, Coordinar la comunicación entre los magistrados constitucionales, gestionar la administración financiera ordinaria del Tribunal, supervisar el cumplimiento de los trámites y los plazos en la gestión de los asuntos

cuyo conocimiento corresponda al Tribunal, organizar y dirigir el registro y el archivo del Tribunal, recopilar, clasificar y publicar la doctrina constitucional del Tribunal, realizar cualquier otra tarea que le encomiende el presidente o, si procede, el vicepresidente del Tribunal.

Corresponde a la oficial-letrada: Sustituir al secretario general en el caso de ausencia o impedimento, realizar los trabajos de asistencia técnico-lingüística que se le encomienden, supervisar la actividad registral interna, preparar los trabajos de documentación y, si procede, de propuesta de trámites y resoluciones, organizar la biblioteca, realizar cualquier otra tarea que le encomienden los magistrados o la secretaria general.

Corresponde a la jefe de los servicios administrativos: La realización material del registro y del archivo, la translación de documentos y la redacción de escritos, la ordenación de la correspondencia y de las agendas de los magistrados constitucionales, colaborar con los servicios de traducción, supervisar la infraestructura de servicios, realizar cualquier otra tarea que le encomienden los magistrados o la secretaria general.

III. NÚMERO DE MAGISTRADOS

El Tribunal Constitucional se compone de cuatro magistrados.

IV. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA ASPIRAR AL CARGO

Los requisitos para ser designado magistrado constitucional son: ser mayor de veinticinco años y tener experiencia reconocida y conocimientos acreditados en el campo jurídico o institucional (Artículo 10 LCTC).

El cargo de magistrado constitucional es incompatible:

- Con el ejercicio de cualquier otro cargo público adscrito a alguna de las instituciones del Estado o de las Parroquias, ya sea de naturaleza electiva, funcional o contractual.

- Con el ejercicio de actividades de representación, gestión, asesoramiento o defensa de intereses privados de terceros dentro del territorio de Andorra.
- Con cualquier cargo directivo en partidos políticos, sindicatos y asociaciones, ya sean nacionales o extranjeros.
- Con cualquier otra actividad que pueda poner en peligro la independencia y la imparcialidad en el cumplimiento de las obligaciones.

V. PROCEDIMIENTO DE NOMBRAMIENTO Y, EN SU CASO, DE REELECCIÓN

Los magistrados constitucionales son designados uno por cada Copríncipe (el obispo de Urgel y el presidente de la República Francesa) y dos por el Consejo General (el Parlamento). Los magistrados designados por el Consejo General son elegidos por mayoría de las tres quintas partes del número de Consejeros Generales de derecho, en la forma que determine el Reglamento de la Cámara, siempre se busca el consenso de todos los grupos parlamentarios. En todos los casos, la designación de un magistrado ha de contener motivación suficiente que avale la idoneidad de la persona para el cargo.

El nombramiento de los magistrados constitucionales lo efectúan los Copríncipes y se publica en el *Boletín Oficial del Principado de Andorra*.

Ningún magistrado constitucional puede ser reelegido para un mandato consecutivo, excepto en el caso de los magistrados elegidos para el primer mandato del Tribunal Constitucional que obtuvieron los números tres y cuatro en la insaculación, ya que con el fin de cumplir las previsiones constitucionales sobre el turno rotatorio en los cargos, cesaron en su mandato cuando lo hubieron ejercido durante cuatro y dos años, respectivamente, y entonces fueron nombrados para un mandato consecutivo posterior. El procedimiento de reelección es el mismo que el de designación.

VI. DURACIÓN DEL CARGO

El mandato de los magistrados es de ocho años contados a partir de la fecha de publicación del nombramiento. Cada dos años cesa uno de los magistrados constitucionales y se sustituye por otro designado por el mismo órgano que eligió al cesante.

VII. SUPUESTOS DE SANCIONES Y/O SEPARACIÓN DEL CARGO

Durante el ejercicio de sus cargos, los magistrados constitucionales son independientes e inamovibles y no pueden ser sancionados si no es por alguna de las causas y en la forma determinadas en la Ley cualificada del Tribunal Constitucional. Si se sintiesen menoscabados en su independencia o perturbados en sus funciones por la acción de cualquier órgano público o por los particulares, han de comunicar el hecho al presidente del Tribunal para que éste solicite el auxilio de la jurisdicción ordinaria en la reparación del menoscabo o perturbación.

Los magistrados constitucionales son responsables civilmente, penalmente y disciplinariamente. La responsabilidad civil y penal por acciones u omisiones cometidas en el ejercicio de su cargo se sustancia delante del Tribunal Superior de Justicia de acuerdo con las leyes sustantivas y procesales que corresponda aplicar a los miembros de la jurisdicción ordinaria. Y la responsabilidad disciplinaria es exigida por el Tribunal Constitucional en Pleno y por unanimidad del voto de los otros miembros en los supuestos de faltas graves y muy graves. En el supuesto de faltas leves, esta responsabilidad es exigida por el presidente del Tribunal o, si procede, por el vicepresidente.

Los magistrados constitucionales cesan en el cargo por finalización del tiempo de mandato, por renuncia voluntaria, por defunción, por incurrir en alguna causa de incapacitación personal o legal, por condena penal por delito doloso y por imposición del mismo Tribunal de una sanción disciplinaria como consecuencia de una falta cualificada como muy grave.

Cualquiera de las causas de incapacitación a que se refiere el apartado anterior es apreciada por el Pleno del Tribunal y comunicada al órgano que designó al magistrado que ha incurrido en ellas con el fin de que proceda a un nuevo nombramiento. En cualquier caso, se entiende como una causa de incapacitación física el no ejercicio de las funciones propias durante un plazo superior a seis meses consecutivos (Artículo 15 LCTC).

Son faltas leves:

- La falta de consideración y respeto a los otros miembros del Tribunal, al personal a su servicio y a las personas que comparezcan en el proceso, cualquiera que sea el título con el que lo hagan.
- El retraso imprudente en el cumplimiento de las obligaciones propias del cargo.

Son faltas graves:

- El incumplimiento del deber del secreto de las deliberaciones.
- La falta de motivación de las decisiones presentadas por los ponentes.
- La negligencia manifiesta y reiterada en el despacho de los asuntos que le competen.
- Las manifestaciones públicas de crítica o disconformidad con las resoluciones y sentencias del Tribunal.
- Dirigir advertencias, felicitaciones o censuras a los demás órganos y poderes del Estado.
- La inasistencia no justificada a dos o más sesiones del Pleno del Tribunal o a dos o más sesiones formalmente convocadas por el presidente.
- El menoscabo de los derechos procesales de que sean parte en el procedimiento o proceso.
- La comisión reiterada de faltas leves cuya sanción no haya prescrito.

Son faltas muy graves:

- El incumplimiento de las incompatibilidades contenidas en la presente Ley.
- El abandono sin justificación de la función jurisdiccional que le corresponde durante más de dos meses.
- La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves.

Procedimiento:

El ejercicio de la función disciplinaria requiere siempre la audiencia y defensa del interesado en el expediente instruido al efecto. Las faltas leves se sancionan con reprimenda verbal o escrita; las faltas graves con suspensión de funciones y remuneración durante un periodo no inferior a quince días ni superior a tres meses; las faltas muy graves con el cese definitivo en las funciones y el cargo. Las sanciones figuran en el libro de actas correspondiente del Tribunal y se cancelan y se consideran prescritas si, en el caso de las faltas leves, transcurriese un plazo de seis meses sin que el afectado incurriese en ninguna otra; en el caso de las faltas graves, la cancelación es procedente en las mismas condiciones transcurrido el plazo de dos años. Contra la sanción impuesta siempre puede interponerse recurso contencioso-administrativo en una sola instancia ante el Tribunal Superior de Justicia.

VIII. CARACTERÍSTICAS DE LAS SESIONES PÚBLICAS O PRIVADAS

Los procedimientos y procesos se inician siempre a instancia de la parte que, excepto si se trata del Ministerio Fiscal o de un órgano jurisdiccional, está representada y defendida por un abogado inscrito en el Colegio de Abogados de Andorra. Los asuntos se registran en el registro de entradas y se les remite a los magistrados para su conocimiento. Al menos una vez al mes se reúne el Pleno del Tribunal en sesión plenaria, estas sesiones son privadas, para juzgar los recursos pendientes. La admisión o inadmisión del escrito de demanda o requerimiento se acuerda mediante auto del Pleno del Tribunal, escuchado el informe del

magistrado ponente. Contra el auto de inadmisión se podrá interponer recurso de súplica en el plazo máximo de seis días hábiles, contando desde la fecha de recepción de la notificación. La resolución de este recurso es inapelable.

En cada sesión ordinaria, mediante sorteo, se realiza el reparto entre los magistrados de los asuntos jurisdiccionales que han tenido entrada en el Tribunal y en los que han de figurar como ponentes. El sorteo se efectúa insaculando cada magistrado un número del uno al cuatro y, a continuación, se reparten sucesivamente los asuntos siguiendo rigurosamente el orden de registro. Antes de proceder a su reparto, el Pleno del Tribunal ha de cualificar la naturaleza de cada asunto. No obstante, el Tribunal podrá decidir, en cualquier momento de la tramitación, acumular varios asuntos en uno solo por motivos de identidad o de semejanza de objeto. En estos supuestos será ponente el magistrado que se encuentre conociendo el asunto repartido en primer lugar.

IX. LA INICIATIVA LEGISLATIVA

El Tribunal Constitucional no goza de la facultad para presentar iniciativas de ley. La iniciativa legislativa la tienen el Consejo General y el Gobierno (artículo 58 de la Constitución), aunque tres Comunes (órganos de autogobierno y de administración de las Parroquias) o una décima parte del electorado nacional pueden presentar proposiciones de ley.

X. PRESUPUESTO ASIGNADO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

El Pleno del Tribunal elabora el proyecto de presupuesto, tomando como base el anteproyecto del presupuesto preparado por la Secretaría General del Tribunal. Una vez aprobado el proyecto de presupuesto por el Pleno del Tribunal y dentro de los términos previstos por la Ley General de las Finanzas Públicas, lo tramita al Jefe de Gobierno solicitando su incorporación al Proyecto de Ley del Presupuesto General. El Pleno del Tribunal fiscaliza la ejecución del presupuesto y aprueba la liquidación.

El cargo de magistrado constitucional es remunerado con cargo al presupuesto del Estado. Dicha remuneración se compone de una cantidad fija anual igual para todos los miembros del Tribunal y de una cantidad variable en función del cargo que se ostente, del número y duración de las sesiones y del número de procedimientos y procesos tramitados por cada uno de ellos. La Ley del Presupuesto ha de prever las partidas destinadas al funcionamiento del Tribunal y, mediante decreto, el Gobierno ha de especificar el régimen de remuneración de los magistrados.

Año	Presupuesto de gastos en euros	Porcentaje que representa con relación al presupuesto del Estado
1998	413.536,69	0,19%
1999	413.536,69	0,21%
2000	413.536,69	0,17%
2001	413.536,69	0,11%
2002	413.536,69	0,16%
2003	413.536,69	0,16%
2004	430.078,15	0,15%
2005	521.632,89	0,17%
2006	493.604,73	0,14%
2007	576.579,64	0,15%

B. SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

El control de constitucionalidad implica la facultad de los magistrados de comparar una norma dictada por el Poder Legislativo o Ejecutivo con la Norma Suprema, para hacer prevalecer a ésta sobre aquellas. El Constituyente andorrano no optó por la originalidad al crear el tipo de control de constitucionalidad, se basó en los sistemas existentes en los países vecinos europeos y lo adaptó a las características y peculiaridades de este pequeño país. Concentró la función de apreciar la inconstitucionalidad de las normas con rango de ley en un solo órgano judicial nacional: el Tribunal Constitucional, y le acordó competencias concretas en el control de la ley y en la defensa de derechos, tales como el control de la constitucionalidad de las leyes y tratados internacionales, la defensa de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y la resolución de los conflictos de competencia entre las Parroquias y el Estado y de atribuciones entre los órganos constitucionales. También pueden los jueces ordinarios, si en la tramitación de un proceso tienen dudas razonables y fundamentadas sobre la constitucionalidad de una ley o de un decreto legislativo cuya aplicación sea imprescindible para la solución de la causa, solicitar al Tribunal Constitucional su pronunciamiento sobre la validez de dicha norma (art. 100 CA).

El Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto o de la norma impugnados, aplica la Constitución de acuerdo con los mandatos y valores que contiene de forma expresa y decide sobre su validez o nulidad, sin efectuar juicios de oportunidad sobre la actuación de los demás poderes públicos. El Tribunal Constitucional no puede dictar sentencias interpretativas (artículo 8.2 LCTC), si una vez impugnada una norma

jurídica general o alguno de sus preceptos hubiese solamente una interpretación de acuerdo con la Constitución y otra o más contrarias, se declarará la inaplicabilidad provisional hasta que el órgano que la ha dictado repare los sentidos inconstitucionales. La nueva norma emitida subsana la anterior sin perjuicio de seguir sometida al régimen general de control de constitucionalidad. La declaración de inconstitucionalidad genera la nulidad de la norma o normas enjuiciadas, se trata de una declaración general y *erga omnes*, que anula para todos y definitivamente la norma enjuiciada, excluyéndola del ordenamiento –en cambio los efectos jurídicos de las decisiones del Tribunal, para los recursos de amparo son *inter partes* con relación al proceso *a quo*–. Las sentencias que estimen la inconstitucionalidad parcial o total de las normas enjuiciadas tienen efecto desde la fecha en que se publiquen en el *Boletín Oficial del Principado de Andorra*, excepto en los supuestos de aplicación retroactiva favorable, en que subsisten los efectos pendientes originados para dichas normas antes de su anulación hasta que no se dicten otras nuevas que regulen las situaciones jurídicas preexistentes (artículo 58.2 LCTC).

El artículo 51 de la Ley Cualificada del Tribunal Constitucional prevé que las sentencias estimatorias de la inconstitucionalidad de la totalidad o de una parte de las normas impugnadas a través del recurso o proceso directo de inconstitucionalidad han de declarar su nulidad radical y la eliminación de los efectos que pudiesen haber producido durante su periodo de vigencia. Con esta finalidad, debe publicarse como anexo a la sentencia correspondiente la tabla de vigencia de las normas que habían sido derogadas por los preceptos declarados inconstitucionales y debe abrirse un plazo no superior a quince días para que los interesados puedan solicitar ante los poderes públicos ser repuestos en la situación jurídica afectada por dichos preceptos.

A pesar de lo indicado, no pueden modificarse las situaciones jurídicas creadas por sentencias firmes con valor de cosa juzgada, excepto en los casos de retroactividad positiva, ni aquellas otras que hayan supuesto la adquisición de un derecho subjetivo. La declaración de conformidad de la norma impugnada con la Constitución impide el replanteamiento en el futuro de cualquier tipo de proceso impugnatorio de aquéllas que alegue la lesión de los mismos preceptos constitucionales.

II. EXPLICACIÓN DE CADA UNO DE LOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LOS CUALES EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CUMPLE CON SU RESPONSABILIDAD DE HACER EFECTIVA LA CONSTITUCIÓN

1. Recurso directo de inconstitucionalidad contra leyes y normas con rango de ley (Art. 45 al 51 LCTC)

El recurso o proceso directo de inconstitucionalidad contra leyes y decretos legislativos puede ser iniciado, en el plazo de treinta días naturales contados desde la fecha de publicación de la norma, por una quinta parte de los miembros de derecho del Consejo General, por el Jefe de Gobierno y por tres Comunes (órganos de gobierno de las Parroquias). El recurso dirigido contra los reglamentos del Consejo General únicamente puede ser iniciado por una quinta parte de sus miembros de derecho. En caso de finalización del mandato de los consejeros por las causas previstas en el artículo 51.1 de la Constitución, su legitimación para la interposición del recurso directo de inconstitucionalidad se prolongará hasta la fecha de la constitución del nuevo Consejo General. Los miembros del Consejo General que hayan interpuesto un recurso directo de inconstitucionalidad mientras estaban legitimados para hacerlo, mantendrán la legitimación para todos los actos relativos a la tramitación del citado recurso, hasta que recaiga sobre el una resolución firme, incluso después de la constitución del nuevo Consejo General.

La admisión de la demanda no suspende la vigencia de la norma impugnada. Las sentencias estimatorias de la inconstitucionalidad de la totalidad o de una parte de las normas impugnadas han de declarar su nulidad radical y la eliminación de los efectos que pudiesen haber producido durante su periodo de vigencia. La sentencia del Tribunal se comunica a las partes y se envía para su publicación inmediata en el *Boletín Oficial del Principado de Andorra*, momento a partir del cual tendrá los efectos correspondientes.

Recurso directo de inconstitucionalidad contra la Ley cualificada de nacionalidad (Causa 93-1-L): recurso interpuesto por el jefe de Gobierno contra la Ley cualificada de nacio-

alidad aprobada por el Consejo General el 3 de septiembre de 1993, se solicitaba la anulación de varios artículos de dicha Ley por considerarlos contrarios a la Constitución y vulneradores del principio de igualdad ya que para adquirir la nacionalidad andorrana a los niños nacidos en Andorra se les exigían condiciones más severas que para los niños que no habían nacido, lo que conducía "a una disparidad normativa sin congruencia con el objeto de la Ley deferida y con la diferencia de situaciones".¹ El Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad, por lo tanto nulos y sin efectos, de los artículos impugnados.

2. Incidente de inconstitucionalidad planteado por los tribunales ordinarios en el curso de un proceso ordinario contra leyes o normas con rango de ley (Art. 52 al 58 LCTC)

En el ejercicio de su función jurisdiccional, los jueces, el Tribunal de jueces, el Tribunal de Cortes y el Tribunal Superior de Justicia de Andorra están legitimados para solicitar la apertura de un proceso incidental de inconstitucionalidad contra leyes, decretos legislativos y normas con fuerza de ley, cualquiera que sea la fecha a partir de la que se hallen vigentes. Es procedente la interposición de la acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional si, en cualquier fase de un proceso jurisdiccional ordinario, el órgano judicial que se encuentra conociendo sobre éste estima, de oficio o a instancia de parte, que una de las normas mencionadas y de aplicación imprescindible para la solución de la causa principal o de algún incidente substanciado en ésta es contraria a la Constitución. Como explica el propio legislador en la Exposición de motivos de la Ley Cualificada del Tribunal Constitucional, el recurso incidental se plantea en términos restrictivos, imponiendo al Tribunal ordinario una serie de exigencias que demuestren no tanto la "posibilidad" de que la ley impugnada sea inconstitucional, sino más bien la "seguridad" y el pleno convencimiento de dicho tribunal ordinario sobre la inconstitucional alegada y la aplicabilidad de la ley en el fondo del proceso de que conoce.

La estimación de inconstitucionalidad debe fundamentarse en la imposibilidad de una interpretación de la norma o normas conforme a la Constitución, en el razonamiento

¹ Sentencia del Tribunal Constitucional del 15 de marzo de 1994, publicada en el *BOPA* nº 21 de 1994.

y explicación de su carácter de norma imprescindible para la solución de la causa principal o del incidente de que se trate y en la inexistencia de una resolución o sentencia del Tribunal Constitucional que haya declarado la constitucionalidad en los términos a que se refiere el artículo 44.3 de la LCTC.

Antes de interponer el escrito ante el Tribunal Constitucional que plantea la acción mencionada, el órgano judicial debe consultar a las partes y al Ministerio Fiscal si estuviese presente en la causa. El Tribunal Constitucional en su sentencia del 3 de abril de 1995 declaró que el órgano judicial aunque pueda actuar de oficio o a instancia de la parte, es él quien toma la decisión final discrecional y bajo su responsabilidad exclusiva, tratándose siempre de una decisión no arbitraria, ya que está sujeta a la misma Constitución, pero que

...no se puede admitir, de ninguna manera, la existencia de un derecho de las partes a promover la cuestión de inconstitucionalidad prevista por el artículo 100 de la Constitución, sino únicamente la facultad de instarla, ya que los ciudadanos sólo pueden acceder directamente a la jurisdicción constitucional por la vía del recurso de amparo (artículos 41.2 y 102 de la Constitución, y capítulo VI del título IV de la Ley cualificada del Tribunal Constitucional).

Oídas todas las partes y bajo su exclusiva responsabilidad, decide sobre la interposición mediante auto. La decisión adoptada en este auto no es recurrible, sin perjuicio de que si es negativa pueda replantearse la petición en instancias sucesivas si las hubiese procesalmente. En el supuesto de que la norma o normas aplicables estimadas contrarias a la Constitución fuesen de vigencia anterior a ésta, el órgano judicial podrá optar entre la interposición de la acción referida o declararlas derogadas en el momento procesal oportuno. En cualquier caso, la declaración de derogación no supone la anulación de la norma preconstitucional sino la simple constatación motivada de la ausencia de vigencia.

Acordada la interposición de la acción incidental de inconstitucionalidad, el órgano judicial debe formar pieza separada con las actuaciones celebradas con este objeto y elevar escrito al Tribunal Constitucional acompañado de esta pieza y exponiendo los fundamentos en que basa sus dudas sobre la constitucionalidad de la norma o normas, así como los

preceptos constitucionales que entiende vulnerados, juntamente con los requisitos exigidos en el artículo 36 LCTC. La causa principal o, si procede, el incidente continuarán su tramitación hasta llegar a la fase de dictar sentencia o resolución en la que se detiene la tramitación hasta que el Tribunal Constitucional pronuncie su auto de resolución o su sentencia. Si el incidente que ha dado lugar al proceso de inconstitucionalidad versase sobre nulidad de actuaciones no puede dictarse sentencia sobre la causa principal hasta que se produzca el pronunciamiento constitucional.

Recibido el escrito y la pieza separada citada, el Tribunal Constitucional admite o no admite la acción de inconstitucionalidad mediante auto motivado. Contra el auto de inadmisión puede interponerse el recurso de súplica del artículo 39.2 LCTC. Admitida la acción e iniciado el proceso incidental, son partes en ellos el órgano judicial que la promueve, el órgano que dictó la norma impugnada y el Ministerio Fiscal. Pueden personarse como coadyuvantes las partes presentes en el proceso judicial *a quo*.

El pronunciamiento contenido en la sentencia del Tribunal Constitucional vincula en sus términos al órgano judicial que ha interpuesto la acción. Sin embargo, queda exceptuado en el presente caso el principio de inaplicabilidad provisional de las sentencias desestimatorias interpretativas que contiene el artículo 8.2 LCTC que vinculan el órgano judicial accionando en el sentido interpretativo que se contiene y a fin de que pueda dictar sentencia sobre la causa principal. Las sentencias desestimatorias de la inconstitucionalidad alegada tienen los mismos efectos que las dictadas en el proceso o recurso directo. Las sentencias que estimen la inconstitucionalidad parcial o total de las normas impugnadas tiene efecto desde la fecha en que se publiquen en el *Boletín Oficial del Principado de Andorra*. Excepto en los supuestos de aplicación retroactiva favorable, subsisten los efectos pendientes originados para dichas normas antes de su anulación hasta que no se dicten otras nuevas que regulen las situaciones jurídicas preexistentes.

Acción incidental de inconstitucionalidad planteada sobre: si el artículo 3.1 a) párrafo 2 de la Ley de creación de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andorra, del

3 de septiembre de 1993 (Causa 97-1-PI)² vulnera los artículos 17 y /o 18 de la Constitución al declarar obligatoria la inscripción de los comerciantes, industriales y titulares de servicios en el censo de la Cámara. El Tribunal Constitucional declaró que dicho artículo era constitucional ya que no vulneraba la Constitución porque aunque las Cámaras –como corporaciones que son– ejercen un cierto poder para asumir algunas funciones de naturaleza pública y están, por ello, sometidas a la tutela administrativa, no se integran en el sistema de la Administración pública.

3. Dictamen previo de inconstitucionalidad sobre tratados internacionales (Art. 59 al 62 LCTC)

Los tratados internacionales aprobados por el Consejo General o concluidos por el Gobierno en los términos contemplados en el artículo 64 de la Constitución pueden ser objeto de control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional a petición de uno o de los dos Copríncipes, de una quinta parte de los miembros de derecho del Consejo General o del Jefe de Gobierno.

El procedimiento se inicia mediante escrito de solicitud de dictamen de constitucionalidad y debe ser presentado ante el Tribunal Constitucional con los requisitos exigidos en el artículo 36 de su Ley, dentro del plazo común comprendido entre el octavo y el decimoquinto día que otorga la Constitución a los Copríncipes para manifestar el consentimiento del Estado. El propio redactor de la Ley cualificada del Tribunal Constitucional constata que surge aquí un problema que la Ley del Tribunal Constitucional no puede regular: se trata del control previo de los acuerdos internacionales concertados por el Gobierno. Puesto que la Constitución no establece el momento de la ratificación definitiva de estos acuerdos, puede suceder que el Gobierno los ratifique previamente e informe después de su celebración, que es lo único que exige el Apartado 2 del Artículo 64 de la Constitución. De esta forma, el control previo sería imposible. Por eso sería conveniente que una ley estableciese

² Sentencia del Tribunal Constitucional del 3 d'abril de 1995, publicada en el *BOPA* nº 19 de 1995.

un plazo previo para la ratificación definitiva de los acuerdos internacionales del Gobierno, para que durante el mismo se pudiese efectuar el control de constitucionalidad.

La interposición del escrito ante el Tribunal Constitucional impide la ratificación del tratado hasta el momento en que el Tribunal emita su dictamen con los efectos previstos en el artículo 62 de la LCTC. Admitido el escrito, el Tribunal Constitucional debe ordenar la tramitación preferente y dar traslado inmediato al Consejo General o al Gobierno, según si el tratado que tiene que dictaminarse es de los comprendidos en el apartado 1 del artículo 64 de la Constitución o en el apartado 2 del artículo 64 de ésta, para que comparezcan y contesten en el plazo máximo de diez días hábiles.

El magistrado ponente debe recopilar todos los informes y documentos que estime necesarios para formular su propuesta de dictamen, que en todo caso, debe presentar al Pleno del Tribunal en un plazo máximo de quince días hábiles contados desde la fecha de entrada del escrito de contestación. El Tribunal emitirá el dictamen de constitucionalidad dentro de los tres días posteriores al de la formulación de la propuesta mencionada. El dictamen del Tribunal Constitucional ha de pronunciarse sobre la adecuación a la Constitución de las estipulaciones del tratado o del acuerdo que hayan sido cuestionadas así como, cuando proceda, sobre el cumplimiento del procedimiento de negociación previsto en la Constitución. Si el dictamen contiene algún pronunciamiento de inconstitucionalidad, el tratado no puede ratificarse ni tampoco puede manifestarse el consentimiento del Estado en el caso de los acuerdos. Cuando la inconstitucionalidad no se produzca por un vicio de procedimiento, el Tribunal debe indicar los preceptos constitucionales que resultan afectados por si fuese procedente la previsión del párrafo segundo 2, apartado 2 del artículo 101 de la Constitución.

No existe jurisprudencia sobre este procedimiento ya que sólo ha sido utilizado en una ocasión, la demanda se introdujo delante del Tribunal Constitucional el 4 de mayo de 2008 y la resolución está pendiente.

4. Dictamen previo sobre la adecuación a la Constitución de las leyes instado por los Copríncipes (Art. 63 al 68 LCTC)

Las leyes aprobadas por el Consejo General a las que se refieren los artículos 45.1 g) y 63 de la Constitución pueden ser sometidas por uno o por los dos Copríncipes a control previo de constitucionalidad mediante escrito conjunto o individualizado de requerimiento de dictamen al Tribunal Constitucional. La Constitución, de manera expresa, únicamente reserva a este tipo de control previo las leyes aprobadas por el Consejo General, pero no los decretos legislativos. La sanción de los Copríncipes solamente es exigible para las leyes del Consejo, pero no para las normas que provienen del Gobierno.

La interposición del escrito debe realizarse entre el octavo y el decimoquinto día del plazo destinado a la sanción de las leyes tal como señala el artículo 45.2 de la Constitución y con los requisitos establecidos por el artículo 36 de la Ley Cualificada del Tribunal Constitucional. La interposición del escrito de requerimiento de dictamen interrumpe el transcurso del plazo de sanción.

El dictamen emitido por el Tribunal Constitucional en forma de auto, declara la adecuación o inadecuación parcial o total de la Ley a la Constitución, de acuerdo con las peticiones realizadas en los escritos de interposición. Si cada uno de los Copríncipes hubiese requerido dictamen individualmente, el pronunciamiento del Tribunal debe recaer sobre todas y cada una de las pretensiones de los requeridores en documento único. Después de la aprobación del dictamen, el Tribunal lo notifica a todos los órganos que han intervenido en el procedimiento y ordena que se publique inmediatamente en el *Boletín Oficial del Principado de Andorra*.

Si el procedimiento solamente hubiese sido instado por uno de los dos Copríncipes, la declaración del Tribunal favorable a la constitucionalidad total de la ley objeto del dictamen no impide que el requeridor pueda abstenerse de sancionar la ley en los términos del párrafo segundo del apartado 2 del artículo 45 de la Constitución. Si el procedimiento hubiese

sido instado por los dos Copríncipes y la declaración del Tribunal fuese igualmente favorable a la inconstitucionalidad de la Ley, ésta debe promulgarse con la sanción, como mínimo uno de ellos. Si el Tribunal declarase la inconstitucionalidad parcial o total de la ley objeto del dictamen, no es procedente la sanción de ninguno de los dos Copríncipes, sin perjuicio de lo que dispone el apartado siguiente. En el supuesto de inconstitucionalidad parcial de la ley, se presumen válidos todos sus demás preceptos. El Consejo General puede solicitar la sanción de los Copríncipes para los preceptos válidos para que sean publicados como una ley.

Dictamen previo de inconstitucionalidad sobre la Ley cualificada de inmigración del 9 de noviembre de 2000, (Causa 2000-1-DP)³ instado por los dos Copríncipes. Se solicitaba el dictamen sobre la totalidad de la Ley. El Tribunal Constitucional el 6 de febrero de 2000 dictó un auto en el que declaraba que la Ley enjuiciada incurría en vicio de inconstitucionalidad, en referencia a los artículos 6.1, 26, 27, 29 y 30, y a la disposición adicional segunda, por ser contrarios a la Constitución.

5. Conflictos de competencias entre los órganos constitucionales del Estado (Art. 69 al 84 LCTC)

El legislador distingue entre el conflicto de competencias que surge como consecuencia de actos, resoluciones o disposiciones sin rango de ley y aquel otro que surge como consecuencia de una ley o decreto legislativo: en este último supuesto, no nos hallamos propiamente ante un conflicto, sino delante de una norma con rango de ley que puede vulnerar la distribución de competencias que contiene la Constitución y, por tanto, delante de una posible ley inconstitucional: por eso, el proceso que corresponde no es el propio del conflicto sino el del recurso directo de inconstitucionalidad, con todos sus requisitos y consecuencias. Por lo que respecta a los conflictos entre los órganos generales del Estado, existe un único procedimiento: el previsto en el artículo 46.1.g) de la Constitución.

³ Auto del Tribunal Constitucional del 9 de febrero de 2001, publicado en el BOPA nº 18 de 2001.

Si los actos, resoluciones o disposiciones normativas del Consejo General o del Gobierno invadiesen el ámbito competencial reservado para la Constitución en los Comunes, o si éstos ejerciesen competencias propias del Consejo General, del Gobierno o de otro Común, los órganos afectados pueden formalizar conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. Es igualmente procedente la formalización del conflicto cuando la inactividad competencial de alguno de los órganos generales del Estado de los Comunes impida, obstaculice o lesione a la otra en el ejercicio de una competencia que le es propia o vulnere algún derecho subjetivo de los particulares. En el caso de que la invasión competencial se atribuyese a una ley del Consejo General o a un decreto legislativo del Gobierno, el conflicto se sustancia a través del proceso de inconstitucionalidad regulado en el capítulo II del título IV de la Ley Cualificada del Tribunal Constitucional en todos sus extremos, incluido el de la legitimación activa (artículo 69.3 LCTC).

Al efecto de determinar la naturaleza constitucional de las competencias en litigio, y de su resolución, el Tribunal, además de las previsiones constitucionales, aplica lo que disponga la ley o leyes cualificadas que delimiten las competencias de los Comunes, determinen sus facultades económicas y fiscales y aseguren las aportaciones del Estado al presupuesto municipal.

Aparte del supuesto previsto en el artículo 69.3 de la LCTC, antes de proceder a la formalización del conflicto ante el Tribunal Constitucional, el órgano afectado por el acto, resolución o disposición ha de requerir a su titular para que cese en la actividad que reputa invasora o que anule dicha resolución o disposición. El requerimiento mencionado debe efectuarse en el plazo de quince días hábiles desde que tuvo notificación o conocimiento del acto, resolución o disposición. Si transcurridos quince días hábiles más, el órgano requerido no se pronunciase, se entiende que la pretensión queda desestimada. El conflicto de competencias se inicia mediante la interposición de un escrito de demanda ante el Tribunal Constitucional, dentro del plazo de veinte días hábiles contados desde el momento de la notificación de la desestimación expresa del requerimiento o del transcurso del plazo de la desestimación tácita. El escrito, además de los requisitos generales establecidos en el

artículo 36 de la LCTC, debe acompañar a la documentación que acredite haberse realizado el requerimiento en los términos establecidos en el artículo anterior y contener la petición expresa, si procede, de que el Tribunal suspenda el ejercicio de la competencia impugnada.

El Tribunal Constitucional, además de por las causas generales, puede no admitir el escrito de demanda por entender que la competencia en litigio no es de naturaleza constitucional, porque el conflicto debe ser substanciado por otras vías procesales diferentes, por haberse pronunciado anteriormente sobre esta misma competencia.

Admitido el escrito de demanda y recibida la contestación, de acuerdo con las normas generales de tramitación, el Tribunal, a través de auto, decide sobre la suspensión de los efectos del acto, resolución o disposición impugnados. En todo caso, es procedente acordar la suspensión de estos efectos cuando, si se mantuviesen, se pudiera causar perjuicios a la otra parte de difícil o imposible reparación o cuando el ejercicio de la competencia pudiese consumarse a lo largo del proceso sin continuidad posterior, vaciando de contenido el objeto del litigio.

La sentencia atribuye la competencia litigiosa a alguna de las dos partes, con determinación de la misma y de la función que comprende y decide sobre la validez de los actos jurídicos realizados como consecuencia del ejercicio de dicha competencia. Las responsabilidades por daños, si las hubiese, son exigibles ante la jurisdicción ordinaria.

Los conflictos por inactividad competencial se tramitan de la misma manera que lo establecido anteriormente, cuando el demandante sea alguno de los órganos públicos que se mencionan. El escrito de requerimiento tiene que solicitar del otro órgano el ejercicio de la competencia. En cuanto al resto, se rigen por las mismas normas. En el escrito de interposición, debe hacerse constar la conexión causal entre la inactividad competencial alegada y la imposibilidad del ejercicio de la competencia propia. En cuanto al resto, se rige por las mismas normas. Cuando el órgano requerido por inactividad competencial sea

un Común, el Tribunal debe tener en cuenta, además de la Constitución y de la ley o leyes cualificadas que delimiten las competencias de los Comunes, determinen sus facultades económicas y fiscales y aseguren las aportaciones del Estado al presupuesto municipal, las leyes que hayan transferido competencias de titularidad estatal a las Parroquias.

La sentencia atribuye la competencia y ordena el ejercicio, adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de su decisión.

Si el demandante es un particular, el conflicto se tramita de acuerdo con las disposiciones relativas a los conflictos negativos de competencias contempladas en la sección segunda del capítulo quinto de la Ley Cualificada del Tribunal Constitucional.

Conflicto positivo de competencias constitucionales (Causa 94-1-CC):⁴ El Consejo Superior de la Justicia pedía que se le atribuyera la competencia concedida al Gobierno, en materia de gestión administrativa de todas las personas, bienes, locales, archivos y dotaciones económicas en general que aseguren el funcionamiento de los órganos de la justicia y en materia de autonomía de gestión de su presupuesto. El Tribunal Constitucional en su sentencia del 16 de diciembre de 1994 desestimó la totalidad de la demanda presentada por el Consejo Superior de la Justicia y declaró que esa competencia pertenecía al Gobierno.

6. Recurso de amparo constitucional por la lesión de derechos fundamentales reconocidos (Art. 85 al 96 LCTC)

Por medio del recurso o proceso de amparo, el Tribunal Constitucional garantiza, como instancia jurisdiccional superior, los derechos reconocidos en los capítulos III y IV del título II de la Constitución, con la excepción del derecho a que se refiere el artículo 22 de ésta. La legislación andorrana contempla tres tipos de recursos de amparo constitucional: El recurso de amparo directo (artículo 95 LCTC) contra actos del Consejo General, sin carácter de ley; el recurso general de amparo (artículos 85 a 92 LCTC), que hace referencia a la protección

⁴ Sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de diciembre de 1994, publicada en el *BOPA* nº 74 de 1994.

de los derechos inscritos en los capítulos III y IV del título II de la Constitución, se trataría de una tercera instancia extraordinaria de índole constitucional, contra las resoluciones definitivas adoptadas por la jurisdicción ordinaria dentro del procedimiento especial urgente y preferente previsto para la protección directa de los derechos fundamentales, y, el recurso especial de amparo (artículo 94 LCTC), que puede interponerse contra los actos de los poderes judiciales, seguidos en procedimiento judicial o prejudicial que vulneren algunos de los derechos contenidos en el artículo 10 de la Constitución. En el recurso general de amparo, se produce una estricta continuidad entre el objeto procesal perseguido, el derecho material fundamental invocado y las partes en el proceso a quo. En cuanto al recurso especial de amparo, ...

no existe esta continuidad, porqué, de hecho, se plantea como un incidente surgido durante el proceso ordinario principal, que, según las circunstancias, puede continuar o no su curso y que, por descontado, ni mantiene el mismo objeto procesal, ni el mismo derecho material debatido, ni, en consecuencia, se tiene que producir una coincidencia de partes entre las del proceso a quo y las del mismo proceso de amparo (Sentencia del 11 de septiembre de 1998, causa 98-1-RE).

El recurso de amparo, con la excepción de los supuestos contemplados en los artículos 95 y 96 de la LCTC, se interpone frente a sentencias desestimatorias de la demanda dictadas en última instancia por la jurisdicción ordinaria en el curso del procedimiento urgente y preferente previsto en el artículo 41.1 de la Constitución. Están legitimados para interponer recurso de amparo constitucional los que hayan sido parte demandante o coadyuvante de ésta en el procedimiento referido en el artículo anterior. Son parte demandada y coadyuvante en el recurso de amparo quienes hayan ostentado esta condición en la instancia precedente.

La interposición del recurso de amparo se efectúa mediante escrito, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la fecha de notificación de la sentencia que se impugna de acuerdo con las condiciones generales exigidas en el artículo 36 de la LCTC, solicitando la anulación de dicha sentencia y, si procede, la suspensión de sus efectos y reiterando la pretensión de protección jurisdiccional del derecho cuya lesión se aduce en los

mismos términos formulados en la instancia *a quo*. No se admite ningún recurso de amparo que modifique el contenido de la pretensión de protección del derecho o derechos planteada en el procedimiento urgente y preferente anterior.

Una vez presentado el escrito, el Tribunal Constitucional requiere al órgano jurisdiccional cuya sentencia se recurre para que le traslade la causa en un plazo de tres días hábiles y nombra magistrado ponente. A la vista de las actuaciones, decide mediante auto la admisibilidad del recurso. Contra el auto de inadmisión puede interponerse el recurso de súplica mencionado en el artículo 38 de la LCTC.

Cuando el recurso se ha admitido a trámite, y después de pronunciarse sobre la suspensión de los efectos de la sentencia recurrida si procediese, el Tribunal traslada éste a la parte demandada, a sus coadyuvantes y al Ministerio Fiscal a fin de que aleguen lo que en derecho proceda en un plazo no superior a quince días hábiles. Recibidas las alegaciones, se abre un nuevo plazo de seis días hábiles para que las partes y el Ministerio Fiscal formulen sus conclusiones.

El Tribunal dicta sentencia dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de admisión del recurso. La estimación del recurso puede ser total o parcial. La estimación total supone la anulación de la sentencia recurrida y de todos sus efectos, la declaración de haberse lesionado un derecho constitucional y la reposición del recurrente en la plenitud de su derecho mediante la adopción de las medidas necesarias que lleven a este fin. Si la lesión del derecho fuese materialmente irreparable, el Tribunal determina el tipo de responsabilidad en que ha incurrido el sujeto que violó el derecho, con el fin de que pueda exigirse ante la jurisdicción ordinaria. La estimación parcial se produce cuando el Tribunal considera válidos alguno o algunos de los pronunciamientos contenidos en la sentencia recurrida. En relación con el derecho que se considera lesionado son de aplicación en la estimación parcial los requisitos contenidos en el apartado anterior. La desestimación del recurso de amparo comporta la condena en costas del recurrente.

Con la excepción de lo que dispone el artículo 94 LCTC, las sentencias dictadas por la jurisdicción ordinaria en el resto de procedimientos no son revisables por el Tribunal Constitucional y tienen naturaleza de cosa juzgada de acuerdo con las leyes procesales.

Si se produjera vulneración de alguno de los derechos recogidos en el artículo 10 de la Constitución en el curso o con motivo de un procedimiento judicial o prejudicial, el sujeto afectado debe alegar esta lesión en defensa de su derecho ante el órgano judicial ordinario por los medios y recursos que la legislación establezca. Una vez que ya no se pueda interponer ningún recurso ni exista ningún medio más de defensa del derecho constitucional lesionado, la persona a la cual se le haya vulnerado el derecho constitucional a la jurisdicción puede interponer recurso de amparo delante del Tribunal Constitucional en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la última resolución denegatoria o de la fecha en la que tuvo conocimiento de la resolución judicial que vulnera el derecho constitucional a la jurisdicción. El Ministerio Fiscal puede igualmente interponer, de oficio o a instancia de la interesada, recurso de amparo delante del Tribunal Constitucional para la defensa del derecho fundamental a la jurisdicción contra resoluciones u omisiones judiciales que lo vulneren, una vez que se hayan agotado los medios de defensa en la vía ordinaria, en el mismo plazo que el del apartado anterior. En el escrito de interposición del recurso tienen que hacerse constar expresamente las actuaciones realizadas en la vía ordinaria en defensa del derecho vulnerado y se tiene que adjuntar copia. El Tribunal Constitucional, una vez presentado el escrito de demanda en amparo por parte de la persona afectada por la vulneración del derecho fundamental a la jurisdicción, antes de decidir sobre su admisión a trámite, tiene que solicitar un informe al Ministerio Fiscal, quien deberá emitirlo en el plazo máximo de quince días hábiles. Este informe no tiene carácter vinculante. La falta de emisión del informe en el tiempo establecido no detiene los plazos para que el Tribunal Constitucional resuelva sobre la admisión a trámite del recurso de amparo.

Las disposiciones, resoluciones y actos del Consejo General que no tengan carácter de Ley y lesionen alguno de los derechos a que se refiere el artículo 85 de la LCTC, pueden ser impugnados directamente a través del proceso de amparo por los sujetos afectados.

La interposición del escrito de impugnación y solicitud de amparo constitucional ha de efectuarse en el plazo de quince días hábiles contados desde la fecha de notificación o, si procede, de publicación de la disposición, resolución o acto y de acuerdo con las condiciones generales del artículo 36 de la LCTC. La admisión o inadmisión a trámite por parte del Tribunal se rige por las normas generales del procedimiento de amparo especificadas en este capítulo. En la impugnación de los actos, resoluciones y disposiciones del Consejo General se incluye, si procede, el trámite de recepción a prueba. La sentencia que ponga fin al procedimiento debe estimar o desestimar la pretensión, con los pronunciamientos generales, en este último caso, previstos en el artículo 92.2 de la LCTC.

Recurso de amparo (Causa 2007-2-RE.:⁵ Los recurrentes pretendían que se había producido una dilación indebida, imputable al funcionamiento de la administración de justicia, causándoles una violación al derecho a un juicio de duración razonable garantizado en el artículo 10.2 CA ya que la tramitación del caso por la jurisdicción ordinaria se inició en septiembre de 2001 y finalizó en el mes de noviembre de 2006. El Tribunal Constitucional, por sentencia del 25 de mayo de 2007, aplicando los criterios definidos en su jurisprudencia basándose en la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, concedió el amparo a los recurrentes, declaró que los tribunales les habían vulnerado el derecho a un juicio de duración razonable y que tenían derecho a recibir una indemnización.

III. PROCEDIMIENTO PARA CREAR JURISPRUDENCIA

El Tribunal Constitucional únicamente está sometido a la Constitución y a su Ley cualificada. La doctrina interpretativa de la Constitución elaborada por el Tribunal y que sirve de fundamento a sus sentencias vincula también a los diferentes órganos de la jurisdicción ordinaria. Los precedentes que establezca constituyen criterios interpretativos autovinculantes, excepto si decide por mayoría absoluta de sus miembros que debe modificarse y lo exprese de forma motivada. Se presume la existencia de un precedente cuando, como mínimo,

⁵ Sentencia del Tribunal Constitucional del 25 de mayo de 2007, publicada en el *BOPA* nº 47 de 2007.

dos supuestos idénticos se hayan resuelto con la misma decisión y basándose en la misma doctrina. Los acuerdos se adoptan por mayoría de votos y, si el asunto debatido es de naturaleza jurisdiccional, en caso de empate decide el magistrado ponente con voto de calidad. La jurisprudencia se compone de los fundamentos jurídicos de las sentencias.

C. POSICIÓN FRENTE A CUATRO TEMAS RELACIONADOS CON LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL

I. USO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO

El Tribunal Constitucional está únicamente sometido a la Constitución y a la Ley que lo regula, y los precedentes que establece constituyen criterios interpretativos auto-vinculantes, excepto si decide por mayoría absoluta de sus miembros que debe modificarse y lo exprese de forma motivada. El artículo 3 de la Constitución dice que Andorra incorpora a su ordenamiento los principios de derecho internacional público universalmente reconocidos, pero no existe ningún documento administrativo o jurisdiccional donde se defina la justificación del derecho constitucional comparado y su método de empleo por el Tribunal. En ningún caso, el Tribunal está sometido a otro ordenamiento o jurisprudencia extranjera, aunque es evidente que los jueces constitucionales los conocen y los tienen en consideración en el momento de redactar las sentencias, sin que ello tenga una influencia absoluta y directa sobre la labor jurisdiccional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene vigencia en Andorra, así como el Convenio europeo para la salvaguarda de los derechos humanos y de las libertades fundamentales –que fue ratificado por el estado andorrano en noviembre de 1995–, ya que como afirma el artículo 4 de la Constitución, los tratados y acuerdos internacionales se integran en el ordenamiento jurídico a partir de su publicación en el *Boletín Oficial del Principado de Andorra*, y no pueden ser modificados o derogados por las leyes. Por lo tanto, el Tribunal estudia minuciosamente la jurisprudencia del Tribunal europeo de derechos humanos, y la cita en sus decisiones ya que el Convenio es parte integrante de su ordenamiento. El Tribunal Constitucional cita a menudo la jurisprudencia relativa al artículo 6 del Convenio para la salvaguarda de los derechos humanos y libertades fundamentales, como

por ejemplo en las decisiones sobre las causas 2008-4-RE,⁶ 2007-16 i 22-RE,⁷ 2007-21-RE,⁸ 2007-2-RE,⁹ 2000-17-RE,¹⁰ etcétera, que determina los criterios generales que permiten obtener el juicio de razonabilidad sobre la duración del proceso, tales como la complejidad del asunto sometido a juicio, la conducta de los litigantes y la actitud de los poderes públicos. Por otro lado, no son infrecuentes los encuentros con instancias europeas de protección de derechos (tanto el mencionado Tribunal europeo como la Comisión de Venecia) lo que hace que el Tribunal esté no sólo informado sino que también sea muy sensible a la jurisprudencia europea.

II. IMPACTO ECONÓMICO DE LAS DECISIONES JURISDICCIONALES

No se ha hecho ningún análisis o estudio sobre el impacto económico de las decisiones jurisdiccionales constitucionales.

El único impacto económico que hemos podido constatar es el producido por las sentencias del Tribunal europeo de derechos humanos, ya que dos veces el Estado andorrano ha sido condenado por el Tribunal europeo a pagar una indemnización a los recurrentes por haberse producido una violación de sus derechos fundamentales. Se trata del caso Pla y Puncernau contra Andorra, sentencia del 13 de julio de 2004, y del caso Vidal Escoll y Guillán González contra Andorra, sentencia del 29 de julio de 2008.

III. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El Tribunal Constitucional andorrano es una institución muy pequeña y muy discreta. No ha establecido ninguna estrategia de comunicación social para efectos de coadyuvar a la legitimidad de las decisiones judiciales frente a la opinión pública. No tiene gabinete de prensa, ni

⁶ Sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de junio de 2008, publicada en el *BOPA* nº 52 de 2008.

⁷ Sentencia del Tribunal Constitucional del 12 de noviembre de 2007, publicada en el *BOPA* nº 98 de 2007.

⁸ Sentencia del Tribunal Constitucional del 12 de noviembre de 2007, publicada en el *BOPA* nº 98 de 2007.

⁹ Sentencia del Tribunal Constitucional del 25 de mayo de 2007, publicada en el *BOPA* nº 47 de 2007.

¹⁰ Sentencia del Tribunal Constitucional del 14 de marzo de 2001, publicada en el *BOPA* nº 28 de 2001.

hace comunicados de prensa y sólo habla a través de sus decisiones que son publicadas en el *Boletín oficial del Principado de Andorra* para conocimiento de todos y para que produzca sus efectos inmediatos. El Reglamento de organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional, aprobado por el Pleno del Tribunal en su sesión del día 16 de septiembre de 1994 prohíbe a los magistrados tomar posición pública sobre toda cuestión susceptible de ser objeto de decisiones jurisdiccionales del Tribunal, al tiempo que deben observar la máxima reserva en las conversaciones privadas relacionadas con estas mismas cuestiones.

Desde el inicio de su funcionamiento, el Tribunal Constitucional ha conseguido un alto grado de aceptación tanto jurídica como social. Ello ha hecho que la convivencia con la jurisdicción ordinaria se haya mantenido siempre en relaciones de mutua aceptación y respeto. La jurisprudencia constitucional, sin excepciones, es citada como fuente jurídica directa y forma parte del bagaje argumentativo de los diversos órdenes jurisdiccionales. Y, salvo un caso aislado, las decisiones del Tribunal Constitucional siempre se han ejecutado sin poner ninguna resistencia. Por otro lado, se mantienen contactos periódicos tanto con los miembros de los tribunales ordinarios como con el Consejo Superior de la Justicia y ello facilita que se respeten con mucho rigor los diversos ámbitos competenciales.

IV. CIENCIA Y DERECHO

Los magistrados que componen y que han compuesto el Tribunal Constitucional son grandes profesionales del derecho, con una gran reputación en el mundo jurídico. A menudo se han tratado de catedráticos con un gran bagaje constitucional, y aunque existe una partida del presupuesto del Tribunal que prevé la utilización en su labor jurisdiccional, de asesoría de científicos y técnicos, sólo se ha utilizado una vez. Se trataba de una ley con un contenido material muy técnico, y se solicitó dictamen a dos asesores, uno español y otro francés para respetar el equilibrio. Estos dictámenes son meramente informativos, orientativos o consultivos y no determinan la decisión final.

D. DIEZ DECISIONES RELEVANTES DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

1. CAUSA 95-1-PI – Sentencia del 3 de abril de 1995

Publicada en el *BOPA** nº 19 de 1995

La Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia interpuso una acción incidental de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Se planteaba la cuestión de si el artículo 3.1. a) de la Ley de creación de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andorra, de 3 de septiembre de 1993 vulneraba los artículos 17 y 18 de la Constitución al declarar obligatoria la inscripción de los comerciantes, industriales y titulares de servicios en el censo de la Cámara.

El Tribunal Constitucional consideró, en primer lugar, que no existía ninguna incompatibilidad constitucional entre las asociaciones que surgen de la iniciativa privada y las corporaciones de origen público, porque no se puede interpretar el derecho negativo de asociación (es decir el derecho de no asociarse), como un obstáculo que impediría la existencia de las primeras, y en segundo lugar, que el poder público puede constituir corporaciones si son necesarias para la obtención de los fines de naturaleza pública que no puedan ser obtenidos de otra manera, si no impiden la libre concurrencia de las asociaciones surgidas en el mismo ámbito y con un objetivo lícito de defensa de intereses sectoriales, y si, sin perjuicio del control administrativo lógico, el funcionamiento democrático y autónomo de las corporaciones creadas está asegurado. El Tribunal Constitucional declaró que la Ley recurrida era constitucional.

* *Boletín Oficial del Principado de Andorra.*

2. CAUSA 2001-23 i 25-RE – Sentencia del 9 de mayo de 2002

Publicada en el BOPA nº 37 de 2002

Uno de los recurrentes fue condenado por el delito mayor de homicidio y el otro por el delito de omisión del deber de socorro; los dos fueron condenados también por el delito de realización de actos que atenten contra la dignidad de las personas por razón de sexo. Cada uno de ellos presentó por separado un recurso de amparo constitucional y el Tribunal Constitucional decidió acumularlos.

El primer recurrente argumentaba los magistrados de primera instancia habían vulnerado el principio de legalidad en materia penal, ya que le condenaron no a título principal sino a título de un delito menor de realización de actos atentatorios contra la dignidad de la persona, por haber injuriado a la víctima, considerándola homosexual, lo que constituiría, según su parecer, una infracción del artículo 313 del Código penal relativo a los atentados a la dignidad de una persona por razón de sexo. El segundo alegaba que los magistrados de primera instancia dieron al término "sexo" del artículo 313 del Código penal, una interpretación extensiva, no fundamentada e inconstitucional englobando en la misma a la "la orientación sexual" y que se le habían vulnerado los derechos a la presunción de inocencia y a un proceso debido del artículo 10 de la Constitución, ya que el Tribunal Superior de Justicia no había respondido a todas las alegaciones aducidas.

El Tribunal Constitucional recordó que el artículo 9.4 de la Constitución dispone que "*Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa*" y que el artículo 313 del Código penal no prevé expresamente el atentado contra la dignidad de una persona por razón de su sexo sin hacer ninguna mención al atentado contra la dignidad de una persona por razón de su orientación sexual. El Tribunal Constitucional consideró pues que el hecho de asimilar unos hechos que podrían ser contemplados eventualmente como atentados contra la dignidad

de una persona por razón de su orientación sexual a una infracción de atentado contra la dignidad por razón del sexo, los magistrados del Tribunal de Corts, con independencia de la legitimidad de su intención, habían extendido equivocadamente a la orientación sexual un texto destinado a proteger la dignidad del hombre y de la mujer como tales, y habían sancionado de esta manera unos actos que, en el momento de los hechos, no constituían una infracción;

El Tribunal Constitucional también constató que el Tribunal Superior de Justicia se había limitado a contestar con una fórmula muy general y no específica, que no responde a la exigencia constitucional formulada por el artículo 10 de la Constitución, relativo al derecho a la jurisdicción, más concretamente al derecho a obtener una decisión fundamentada en derecho.

El Tribunal Constitucional otorgó el amparo solicitado por el primer recurrente y otorgó parcialmente el amparo solicitado por el segundo recurrente, y reconoció a ambos recurrentes el derecho al respeto del principio de legalidad penal y al segundo el derecho a una decisión motivada en derecho y a un proceso debido.

3. CAUSA 2002-1-L – Sentencia del 9 de mayo de 2002 **Publicada en el BOPA nº 37 de 2002**

Seis parlamentarios introdujeron un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de presupuesto para el ejercicio 2002 alegando la vulneración, por parte del artículo 3.4, de los artículos 1.4, 3.2, 50, 61 y 72.3 de la Constitución andorrana, relativos, respectivamente, al Coprincipado parlamentario como régimen político (artículo 1.4 CA), la competencia del Consejo General en materia presupuestaria (artículos 50 y 61 CA) y los principios de legalidad y de seguridad jurídica (artículos 3.2 y 72.3 CA). Ya que dicho artículo autorizaba al Gobierno a realizar transferencias de capital "*para gastos reales de inversión hasta un límite de 1% de los créditos autorizados para los gastos reales de inversión del presupuesto del ejercicio*". Para los

recurrentes el hecho de fijar un umbral cuantitativo específico a la transferencia sin método, sin restricciones cualitativas viola el poder del Consejo General (el Parlamento) para aprobar los presupuestos del Estado, y el principio de seguridad jurídica.

El Tribunal Constitucional consideró que la habilitación para la Ley de presupuesto al Gobierno para realizar una transferencia de crédito no es una deslegalización a favor de la potestad reglamentaria sino una atribución de potestad para una actuación administrativa determinada, en la misma línea de las que ya están previstas en la Ley General de las Finanzas Públicas en vigor (artículos 23 y siguientes) que la Ley del Presupuesto modifica para el año 2002. Como atribución de potestad, responde al principio de legalidad, afirmado por la Constitución y que inspira todo el ordenamiento jurídico-administrativo de Andorra. Efectivamente, la legalidad presupuestaria supone una legalidad sustantiva y una legalidad financiera consistente en la determinación cifrada de los créditos asignados a cada órgano para el ejercicio de sus competencias. La legalidad financiera constituye la medida operativa de la legalidad sustantiva y se articula en la conocida triple dimensión de especialidad presupuestaria cuantitativa, que supone un límite máximo al gasto autorizado; de especialidad cualitativa, que impide que el gasto autorizado pueda ser dedicado a una finalidad diferente de la prevista en la autorización presupuestaria de este gasto, y de la temporalidad de la autorización presupuestaria. En efecto, el 1 % no sobrepasa los límites de proporcionalidad y de razonabilidad que la ley debe tener en el momento de fijar un umbral cuantitativo específico al margen de acción del que dispone el Gobierno. Esta disposición permite al Gobierno ejecutar el presupuesto con la flexibilidad indispensable a la eficacia de su acción. Pero, el margen de libertad que así se le acuerda no es incompatible con los principios de la seguridad jurídica, en la medida que el ejercicio de esta libertad está enmarcado por el mencionado umbral y por referencia a una categoría determinada, la de los créditos de inversión real del presupuesto del ejercicio. Por consiguiente, ninguno de los artículos de la Constitución, cuya vulneración alegaban los recurren-

tes, pueden considerarse vulnerados por la norma objeto del recurso, sin perjuicio que las actuaciones materiales del Gobierno, cuando aplique esta Ley, puedan ser objeto de recurso mediante las adecuadas vías jurisdiccionales.

4. CAUSA 2003-1-CC – Sentencia del 9 de mayo de 2003

Publicada en el *BOPA* nº 24 de 2003

El Gobierno de Andorra aprobó un decreto mediante el cual ordenaba el cese de las actividades de combustión del horno incinerador de desechos y delimitaba 4 zonas en función de su contaminación con la finalidad de proteger la salud pública. El Comú de Andorra la Vella decretó entonces que para poder edificar en dos esas zonas el demandante tendría que aportar un certificado del Gobierno conforme el terreno objeto de la demanda no presentaba un grado de contaminación de naturaleza a poner en peligro la vida o la salud humanas. El Gobierno presentó un conflicto de competencias por considerar que el Comú desbordaba su competencia sobre el urbanismo y invadía la competencia del Estado sobre la sanidad.

El Tribunal Constitucional declaró que el Comú de Andorra la Vella había de promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho de todos a un alojamiento digno (artículo 33 de la CA) y a este fin tiene que ejercer sus competencias urbanísticas, otorgadas por la Constitución, y no puede omitir las condiciones sanitarias sobre la habitabilidad. Por consiguiente, no interfirió en las competencias del Gobierno, ni ha innovado la normativa estatal relativa al otorgamiento de licencias, ni ha impuesto una carga al Gobierno sino que ha adoptado una garantía para que se cumpla la normativa urbanística en relación con una situación de excepción a la cual responde el decreto inicial del Gobierno.

El Tribunal Constitucional desestimó pues el conflicto de competencia y declaró que el Comú de Andorra la Vella era competente para aprobar el decreto que aprobó.

5. CAUSA 2004-6-RE – Sentencia del 29 de junio de 2004

Publicada en el *BOPA* nº 41 de 2004

La recurrente había instado delante de la jurisdicción ordinaria una reclamación en indemnización contra un notario en reparación del perjuicio sufrido por la declaración de nulidad de la escritura pública de la donación y herencia que había recibido antes de la entrada en vigor de la Constitución andorrana. La Sala Civil del Tribunal Superior de justicia desestimó su pretensión porque consideró que durante el régimen anterior, el notario actuaba más como un escribano público que como un notario, en el sentido actual de profesional del Derecho y de consejero de las partes. Por lo tanto, su función esencial consistía en poner en forma las disposiciones convenidas entre las partes y de darles fe pública mediante su firma, pero sin ninguna obligación profesional y sin ninguna garantía. La recurrente presentó un recurso de amparo constitucional delante del Tribunal Constitucional alegando la violación del derecho a la jurisdicción, del derecho a un juicio justo y el derecho a la defensa.

El Tribunal Constitucional declaró que si se examinaba uno por uno los argumentos alegados se podría constatar que cada vez cuestionan el poder de apreciación del juez ordinario. La argumentación de la recurrente ha sido estudiada, analizada minuciosamente, para acabar siendo refutada por los jueces por considerarla sin ningún fundamento. Los tribunales actuaron con el respeto debido, siguiendo en todo las reglas de forma. El Tribunal Constitucional no tiene que interrogarse sobre el hecho de saber si los jueces ordinarios tienen razón de pronunciarse como lo han hecho, no entra dentro de sus competencias ejercer el control sobre el poder de apreciación de los jueces ordinarios. Este Tribunal sólo debe buscar si los jueces han respetado o no los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. En el caso enjuiciado, no aparecen ningunos de los argumentos alegados por la recurrente: el derecho a la jurisdicción ha sido respetado, el juicio ha sido justo, los derechos a la defensa han sido respetados y las decisiones del Tribunal Superior estaban lo suficientemente motivadas.

6. CAUSA 2006-1 i 3-CC – Sentencia del 20 de octubre de 2006

Publicada en el *BOPA* nº 82 de 2006

Los Comuns¹¹ de Encamp y de Escaldes-Engordany formularon delante del Tribunal Constitucional dos conflictos de competencias sucesivos que oponían los dos Comuns al Gobierno, sobre dos decretos consecutivos a la declaración como "paisaje cultural" del valle del Madriu-Perafita-Claror, tras su inscripción por la UNESCO en la lista del patrimonio mundial. Los Comuns recurrentes consideraban que esos dos decretos invadían las competencias que el ordenamiento jurídico les había atribuido y que violan su capacidad de gestionar y de administrar los bienes que les pertenecen, ya que el primer decreto articula ciertas reglas sobre la afectación del valle a la categoría de paisajes culturales y el segundo delimita la zona de protección del paisaje cultural del valle en litigio, y abre un periodo de audiencia y de información pública en relación con los criterios arquitectónicos y urbanísticos que deben regir las intervenciones sobre el paisaje cultural declarado y sobre su entorno de protección.

El Tribunal Constitucional expone que los decretos recurridos respetan el sistema constitucional de competencias porque reconocen al Estado, a partir del momento en que declaran el valle del Madriu-Perafita-Claror como bien de interés cultural, la posibilidad de fijar unos criterios cualificados de "arquitecturales y urbanísticos", que deberán tutelar las intervenciones sobre ese bien y prevén al mismo tiempo que los Comuns deberán precisar esos criterios en el momento de la elaboración de los instrumentos de protección, de explotación y de gestión. El Estado puede fijar unos criterios que protejan los valores estéticos, históricos y culturales del valle y de su entorno de protección, y proclamar indirectamente que esos criterios ("arquitecturales y urbanísticos") podrán condicionar las competencias urbanísticas y "patrimoniales" de los Comuns, pero deben reconocer al mismo tiempo que

¹¹ Serían el equivalente a los ayuntamientos.

los Comuns tienen que "precisar" esos criterios cuando elaboren los instrumentos de protección, aceptando así indirectamente que los criterios del Estado deben dejar un margen de acción suficiente a los Comuns para poderlos "precisar", y claro está, para poder completarlos con otros criterios propiamente arquitecturales y urbanísticos.

El Tribunal Constitucional decidió desestimar la totalidad de las pretensiones expuestas en los conflictos de competencias conexos y, por tanto, declarar que los decretos recurridos no invadían las competencias concedidas por la Constitución y la Ley cualificada de delimitación de competencias a los Comuns, para la gestión, la administración y la explotación de los bienes comunales de dominio público, así como en materia de política urbanística de la parroquia, y de prestación de servicios públicos comunales.

7. CAUSA 2006-22 i 25-RE – Sentencia del 25 de mayo de 2007 **Publicada en el BOPA nº 47 de 2007**

En esta causa se pedía la declaración judicial de la demolición de un edificio inacabado. El Tribunal Superior de Justicia, aplicando analógicamente al caso un artículo de la Ley General del Ordenamiento del Territorio y de Urbanismo, dictó una sentencia mediante la cual estimaba la pretensión del demandante. El Comú del territorio donde se ubicaba el edificio y el propietario actual recurrieron en amparo constitucional alegando la violación del derecho a la jurisdicción y del derecho a obtener una decisión fundada en Derecho.

El Tribunal Constitucional declaró, en primer lugar, la legitimación de los Comuns para interponer recursos de amparo y en segundo lugar, después de reiterar que este Tribunal no es un Tribunal de casación o una tercera instancia, considera que la utilización de la analogía como un instrumento de interpretación para salvar las lagunas, no de la ley sino del ordenamiento tiene que responder a determinadas

condiciones sin las cuales se abre la vía de la arbitrariedad, incompatible con los valores protegidos por el artículo 10 de la Constitución de Andorra. Estas condiciones son tres: la existencia de una laguna, la identidad de razón entre el supuesto normado y aquel otro al que analógicamente pretende aplicarse la norma y la no exclusión de dicha aplicación por la decisión del legislador, ya expresa, ya tácita, deducible esta última del argumento "a contrario".

En el presente caso se da una aparente laguna al no regularse el supuesto al que responde la situación del edificio, a saber: una construcción iniciada de acuerdo con la normativa a la sazón vigente y que actualmente no puede terminarse por el cambio de la normativa urbanística durante el tiempo de su construcción y que no está en ruinas ni fuera de ordenación.

Pero es claro que por ello mismo no existe identidad de razón, para extender analógicamente las previsiones de la Ley General de Ordenación del territorio y Urbanismo ya que el edificio en cuestión ni está en ruinas, ni dicho concepto, por autónomo que sea, puede ampliarse, en perjuicio de los interesados, más allá de su determinación legal, sin caer en arbitrariedad ni, como la propia sentencia recurrida afirma, se encuentra "fuera de ordenación". Y la situación de inacabado por cambio de la normativa urbanística en nada se asemeja a los supuestos anteriores, de manera que la interpretación analógica carece de fundamento. Más aún, resulta de todo punto arbitrario excluir las normas del art. 129 que pueden ser favorables a una de las partes, la ahora recurrente, y aplicarle los supuestos del mismo artículo que le son desfavorables.

Por último, que el citado art.129 no prevea el caso de un edificio a medio construir puede interpretarse como argumento "a contrario" y estimar que allí donde el legislador no ha distinguido no es correcto introducir una distinción de acuerdo con el famoso *brocardo ubi lex no distinguit nos non debemus distinguire*, un principio de orden lógico que como tal se integra en los principios generales del derecho que la misma sentencia recurrida invoca.

De otra parte, la solución a la que llega la sentencia recurrida pone en peligro valores constitucionales tales como la seguridad jurídica y la propiedad privada, proclamados en los art. 3.2 y 27 CA. En efecto, resulta gravemente atentatoria para ambos que un edificio cuya construcción se planeó e inicio de acuerdo con la normativa vigente y que no puede acabarse de construir por el cambio de dicha normativa, deba de ser derribado a cuenta de su propietario y sin compensación alguna. El principio indemnizatorio, implícito en la responsabilidad de los poderes públicos afirmada en el citado art.3.2, la garantía patrimonial establecida en el art. 27 CA y la propia normativa expropiatoria que lo desarrolla, ofrecen cauces adecuados para el tratamiento del caso con respeto a los intereses de todos y a los valores constitucionales que los protegen.

8. CAUSA 2007-2-RE – Sentencia del 25 de mayo de 2007 Publicada en el BOPA nº 47 de 2007

La cuestión sometida en este caso a juicio del Tribunal radica en determinar si en la tramitación por la jurisdicción ordinaria, iniciada en el mes de septiembre del 2001 y culminada en el mes de noviembre del 2006, se ha producido una dilación indebida e imputable al funcionamiento de la administración de justicia que haya supuesto una violación al derecho a un "juicio de duración razonable" garantizado en el art. 10.2 CA.

Según la doctrina ya sentada en anteriores casos el derecho a un juicio de duración razonable se formula constitucionalmente como un concepto jurídico indeterminado porque su contenido (la duración "razonable" del proceso) no se puede fijar ni en términos temporales (la duración) ni con cánones precisos y determinados. Ahora bien, es necesario fijar unos criterios generales que adaptados a las peculiaridades del caso concreto permitan obtener el juicio de razonabilidad que la Constitución exige para tutelar un bien jurídico consistente en la obtención de una justicia pronta y eficaz: la complejidad del asunto sometido a juicio, la conducta de los litigantes y

la propia actitud de los poderes públicos, la justicia entre ellos, son los criterios a tener en cuenta para determinar, en cada caso, si la duración del proceso es razonable o no. Y tomar como puntos de referencia todo el proceso, desde sus comienzos hasta su terminación, incluyendo incluso la determinación de las costas y prestando especial atención a la injustificada suspensión de la ejecución.

En el presente caso no se aprecia una especial complejidad jurídica en la cuestión sometida a la jurisdicción ordinaria. Por otro lado la conducta procesal de las partes ha sido correcta por lo cual sólo a la administración de justicia es imputable la indebida tardanza.

Por tanto el Tribunal decidió estimar el amparo solicitado y declarar que los recurrentes tenían derecho a ser indemnizados.

9. CAUSA 2007-11-RE – Sentencia del 7 de septiembre de 2007
Publicada en el BOPA nº 75 de 2007

En este caso el Tribunal penal de primera instancia absolvió al recurrente de un delito de intimidación y coacción a un juez en el ejercicio de sus funciones pero lo condenó por un delito de desacato a 8 meses de prisión condicional. El recurrente apeló esta decisión porque el delito por el cual se le había condenado no había sido objeto de discusión durante el proceso. El Tribunal de apelación le dio la razón, anuló la decisión de primera instancia y retrocedió las actuaciones de nuevo delante del Tribunal penal. Este Tribunal pronunció una segunda sentencia condenando al recurrente por el delito de intimidación a un juez en el ejercicio de sus funciones a 8 meses de prisión condicional.

El recurrente presentó un recurso de amparo por considerar que se había violado su derecho a obtener una decisión fundada en Derecho, a la presunción de inocencia y a un recurso en el orden penal. Sobre los mismos hechos y con la misma

prueba el Tribunal penal concluía de manera opuesta y condenaba al recurrente por un delito por el cual lo había absuelto inicialmente.

El Tribunal Constitucional consideró que se había anulado la sentencia dictada en primera instancia porque se había violado el principio acusatorio, base del proceso penal y como tal tenido por la normativa, la jurisprudencia y la doctrina jurídica andorrana. Los principios que articulan el proceso penal y que se consagran en el art. 10 CA, se encuentran íntimamente concatenados entre sí y el principio acusatorio no puede entenderse desde un punto de vista estrictamente formal, sino en relación con otros, entre ellos, el de contradicción procesal que resulta violado si una alteración de la calificación de los hechos tiene lugar sin la correspondiente audiencia de la defensa del acusado que se ve privado así del derecho fundamental a la defensa.

Ahora bien, de ello se deduce que el recurso de apelación fue solo parcialmente estimado en cuanto a la condena se refiere, como expresamente se dice en la propia sentencia sin que ello afecte a la absolución contenida en la misma sentencia. Y a estos efectos parciales debe entenderse reducida la anulación. En efecto, también las declaraciones judiciales han de entenderse de manera integral y coherente y si la estimación del recurso fue parcial, parcial ha de ser la anulación de dicha estimación resultante, puesto que en otro caso la anulación sin fundamentación resultaría arbitraria, algo que, como tiene declarado este Tribunal, se prohíbe expresamente en el art. 3,2 CA.

Al ser firme la primera sentencia en la parte absolutoria no anulada, tiene los efectos de cosa juzgada que prevé la Constitución, con la consiguiente proyección negativa que le es propia en el proceso penal. En efecto, existe cosa juzgada penal con la función excluyente de un segundo proceso o, al menos, de una segunda sentencia sobre el fondo cuando hay identidad sustancial entre los objetos de los dos procesos, esto es, identidad del hecho hipotéticamente punible, lo que

supone, cuando de conductas humanas se trata, la identidad del acusado. Por tanto, en el caso presente, la absolución del delito de intimidación es cosa juzgada y no puede recaer nueva sentencia sobre el mismo como pretende hacer la segunda sentencia.

El Tribunal Constitucional estimó pues este recurso de amparo.

10. CAUSA 2007-12-RE – Sentencia del 7 de septiembre de 2007

Publicada en el *BOPA* nº 75 de 2007

El recurrente fue condenado por el Tribunal Penal por un delito de contrabando a una pena de 18 meses de prisión firme. Su defensa interpuso un recurso de amparo por considerar que se habían violado durante el proceso su derecho a la presunción de inocencia y su derecho a un proceso debido ya que no había ninguna prueba directa sobre su participación a los hechos imputados.

El Tribunal Constitucional declara que no le corresponde revisar la valoración de la prueba efectuada por los jueces ordinarios. La decisión sobre la existencia, pertinencia y la valoración de las pruebas son cuestiones de legalidad, el Tribunal Constitucional sólo puede pronunciarse al respecto si esta valoración tiene fracturas lógicas evidentes que conviertan las conclusiones y los razonamientos que las sustentan en arbitrarios por absurdos, incoherentes o ilógicos.

Después de examinar una a una las pruebas indiciarias impugnadas por el recurrente el Tribunal concluye que no constituyen pruebas de cargo autónomas capaces por sí solas de desvirtuar la presunción de inocencia y más concretamente considera que la simple reproducción de la declaración inculpativa de un coimputado que no se personó en el juicio oral no permitió al recurrente defenderse de manera plena y mermó el carácter contradictorio del proceso, tanto en cuanto no se aportó

ningún argumento que demostrara que esta declaración en el juicio oral resultara imposible.

Por consiguiente, el Tribunal Constitucional otorgó el amparo solicitado y declaró la retroacción de las actuaciones al momento anterior a la celebración del juicio oral por el Tribunal Penal.